



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación
SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO

**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO
(Y PERSONAS CIUDADANAS)**

EXPEDIENTE: SCM-JDC-2111/2021

PARTE ACTORA:
PORFIRIO CASTRO MATEOS

AUTORIDADES RESPONSABLES:
CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Y OTRAS

MAGISTRADA:
MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS

SECRETARIO:
JUAN CARLOS LÓPEZ PENAGOS

Ciudad de México, a 7 (siete) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno).

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, en sesión pública, **confirma**, en lo que fue materia de controversia, el acuerdo INE/CG1501/2021, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en que cumplió diversas sentencias de esta Sala Regional, entre otras, la emitida en el juicio SCM-JDC-1791/2021.

G L O S A R I O

Acuerdo 1501

Acuerdo INE/CG1501/2021 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a las sentencias de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaídas a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano [y personas ciudadanas] identificados con los números de expediente SCM-JDC-1791/2021 y otros

Candidatura	Candidatura a la presidencia municipal de Pantepec, Puebla
Comisión de Fiscalización	Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Dictamen Consolidado	Dictamen Consolidado INE/CG1376/2021 respecto de las irregularidades encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los partidos políticos y coaliciones, de las candidaturas a cargos de las diputaciones locales y presidencias municipales correspondientes al proceso electoral ordinario 2020-2021, en Puebla
INE	Instituto Nacional Electoral
Juicio de la Ciudadanía	Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (y personas ciudadanas)
Ley de Medios	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Ley Orgánica	Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Resolución 1378	Resolución INE/CG1378/2021 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los partidos políticos y coaliciones, de las candidaturas a cargos de las diputaciones locales y presidencias municipales correspondientes al proceso electoral ordinario 2020-2021, en Puebla
SIF	Sistema Integral de Fiscalización
UTF	Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral

A N T E C E D E N T E S

1. Inicio del proceso electoral local

1.1. Proceso electoral ordinario. El 3 (tres) de noviembre de 2020 (dos mil veinte), inició el proceso electoral ordinario 2020-2021 en el estado de Puebla¹.

¹ Así lo declaró el Instituto Electoral del Estado de Puebla mediante acuerdo CG/AC-033/2020.



1.2. Registro. En su oportunidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla resolvió sobre la procedencia de las solicitudes de registro de candidaturas, entre ellas, la de la parte actora.

1.3. Jornada electoral. El 6 (seis) de junio, se llevó a cabo la jornada electoral para elegir cargos de elección popular el estado de Puebla.

1.4. Dictamen Consolidado. El 11 (once) de julio, la Comisión de Fiscalización aprobó el proyecto de resolución presentado por la UTF, así como el Dictamen Consolidado.

1.5. Resolución 1378. El 22 (veintidós) de julio, el Consejo General aprobó la Resolución 1378, en que determinó que la parte actora rebasó el tope de gastos de campaña.

2. Primer Juicio de la Ciudadanía

2.1. Demanda. El 31 (treinta y uno) de julio, la parte actora presentó Juicio de la Ciudadanía ante la autoridad responsable para controvertir, de manera destacada, la resolución referida en el numeral anterior, dicho juicio quedó registrado en esta sala con el número SCM-JDC-1791/2021.

2.2. Sentencia. El 19 (diecinueve) de agosto, esta Sala Regional revocó parcialmente dicha resolución respecto a las determinaciones sobre el rebase de tope de gasto de campaña relacionadas con la Candidatura de la parte actora y ordenó al Consejo General que a más tardar el 8 (ocho) de septiembre, discutiera y en su caso aprobara el nuevo dictamen consolidado, así como la resolución que correspondiera.

3. Incidente de sentencia

3.1. Escrito incidental. El 28 (veintiocho) de agosto, la parte actora presentó ante esta autoridad un escrito para cuestionar el cumplimiento de la sentencia del juicio SCM-JDC-1791/2021.

3.2. Resolución del incidente. El 29 (veintinueve) de septiembre esta Sala Regional emitió la resolución incidental, en la cual estimó que era infundado el incidente de incumplimiento de sentencia y tuvo por cumplida la sentencia dictada en el citado Juicio de la Ciudadanía².

4. Acuerdo en cumplimiento por parte de Consejo General

4.1. Acuerdo 1501. El 3 (tres) de septiembre, el Consejo General, en cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio SCM-JDC-1791/2021, suscribió el Acuerdo 1501.

5. Segundo Juicio de la Ciudadanía

5.1. Demanda. Inconforme con dicho acuerdo, el 9 (nueve) de septiembre la parte actora presentó demanda con la que se formó el Juicio de la Ciudadanía SCM-JDC-2111/2021, que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

5.2. Instrucción. En su oportunidad, la magistrada tuvo por recibido el expediente, en su oportunidad admitió la demanda, y cerró la instrucción.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver este medio de impugnación,

² La magistrada Maria Guadalupe Silva Rojas, emitió voto concurrente.



pues fue promovido por una persona ciudadana, quien se ostenta como otrora candidato a presidente municipal de Pantepec, Puebla, a fin de impugnar **a)** el Acuerdo 1501; **b)** la modificación del Dictamen Consolidado derivada de la sentencia emitida en el juicio SCM-JDC-1791/2021; **c)** la omisión de la UTF de proporcionar la información solicitada mediante contestación del oficio de garantía de audiencia; supuestos de competencia de esta Sala Regional y entidad federativa en la que ejerce jurisdicción, lo anterior, con fundamento en:

- **Constitución:** artículos 41 párrafo tercero base VI, 94 párrafo primero y 99 párrafos primero, segundo y cuarto fracción V.
- **Ley Orgánica:** artículos 166-III-c) y 176-IV-b).
- **Ley de Medios:** artículos 3.2-c), 79.1, 80.1-f) y 83.1-b).
- **Acuerdo INE/CG329/2017**, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que establece el ámbito territorial de cada una de las circunscripciones plurinominales y la ciudad que será cabecera de cada una.

Esta Sala Regional no pasa por alto que la Ley de Medios, en su artículo 42 dispone que el recurso de apelación será procedente para impugnar la aplicación de sanciones que realice el Consejo General y, en el caso, la materia de impugnación es la transgresión a la garantía de audiencia en el procedimiento de fiscalización que determinó que la parte actora rebasó el tope de gastos de campaña.

Sin embargo, procede conocer la demanda en Juicio de la Ciudadanía y no en recurso de apelación, en virtud de ser la vía elegida por la parte actora y dado que argumenta que, con el acto impugnado, la autoridad responsable transgrede sus derechos político-electorales puesto que *“...la responsable determinó que*

rebasé el tope de gastos de mi campaña, situación que violenta mis derechos político-electorales, toda vez que fue el partido político MORENA, de manera errónea, reportó otros gastos como parte de mi campaña, provocando el rebase...”, por lo que encuadra en los supuestos de procedencia de dicha vía.

En efecto, el derecho de las personas ciudadanas a ser votadas, puede definirse como el derecho individual a ser elegible y a presentarse como persona candidata en las elecciones para cargos públicos³.

Al respecto, el artículo 35 fracción II de la Constitución -en consonancia con el 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 23.1.b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- establece como uno de los derechos de la ciudadanía el “*poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley*”.

Por su parte, los artículos 99 cuarto párrafo fracción V de la Constitución; 166-III, c) y 176-IV.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 79.1, 80.1.d) y 83.1.b)-II de la Ley de Medios, disponen que el Juicio de la Ciudadanía procede contra actos o resoluciones que vulneren -entre otros- el derecho político-electoral de la ciudadanía a ser votada y tomar parte en los asuntos políticos del país.

³ Manuel Aragón; *Treatise on Compared Electoral Law of Latin America*; “Capítulo X. Derecho electoral: Sufragio activo y pasivo”; International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA); 2007 (dos mil siete), página 185. Consultable en: <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina/tratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina-chapter-10.pdf>



En ese sentido, nuestro sistema jurídico electoral reconoce constitucional y legalmente el derecho fundamental al voto y prevé una vía idónea para garantizar su protección: el Juicio de la Ciudadanía.

Si bien, en este caso nos encontramos ante la imposición de una sanción por parte del Consejo General, que según la parte actora vulnera su derecho político-electoral a ser votada y participar en los asuntos públicos del país, de ahí que deba disponer de una vía jurisdiccional para demandar su restitución que resulte idónea para dicha pretensión.

Lo anterior, sobre todo si se toma en cuenta que los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución (específicamente en sus párrafos segundo y tercero), consagran el derecho humano a la protección judicial efectiva, que implica -entre otras cuestiones- contar con recursos sencillos, rápidos y efectivos para impugnar la vulneración a derechos fundamentales y el deber de las autoridades jurisdiccionales de resolver los conflictos de manera integral y completa, evitando formalismos o interpretaciones no razonables u ociosas que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo.

De los referidos artículos se desprende el principio *in dubio pro actione* (en caso de duda debe favorecerse a quien intenta una acción), que consiste en el deber de los órganos jurisdiccionales -al interpretar los requisitos procesales- de adoptar la interpretación más favorable a la pretensión de quien acude en defensa de sus derechos humanos, con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables impidan una

resolución de fondo del asunto⁴ o, también, su retraso injustificado.

Por tanto, considerando que el Juicio de la Ciudadanía es la vía idónea para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, y en atención al derecho a una protección judicial efectiva, dado que fue el medio de impugnación elegido por la parte actora para controvertir la determinación que estima transgrede su derecho político-electoral a ser votada, procede conocer este medio de impugnación como Juicio de la Ciudadanía.

SEGUNDA. Cuestión previa. La parte actora señala como actos reclamados:

- a) El Acuerdo 1501, que atribuye al Consejo General;
- b) La modificación del Dictamen Consolidado, que atribuye a la Comisión de Fiscalización;
- c) La omisión de proporcionar la información solicitada mediante contestación del oficio de garantía de audiencia, que atribuye a la UTF; y
- d) La notificación practicada en cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional en el Juicio de la Ciudadanía SCM-JDC-1791/02021, que también atribuye a la UTF.

⁴ Criterios contenidos en las tesis aisladas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación **CCVI/2018 (10a.)** de rubro **PRINCIPIO PRO ACTIONE. EN SU APLICACIÓN A CASOS EN LOS QUE NO EXISTA CLARIDAD RESPECTO A SI UN ASUNTO ES O NO JUSTICIABLE, DEBERÁ PREFERIRSE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN**, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018 (dos mil dieciocho), Tomo I, página 377; y de Tribunales Colegiados de Circuito **IV.2o.A.34 A (10a.)** de rubro: **TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y PRINCIPIO IN DUBIO PRO ACTIONE O FAVOR ACTIONIS. INTERPRETACIÓN DE LA QUE DEBE PARTIR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PARA RESPETAR ÉSTE Y LOS PARÁMETROS CONVENCIONALES Y CONSTITUCIONALES DE AQUÉLLA, RESPECTO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO, PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 56, FRACCIÓN VII Y 57, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN**, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013 (dos mil trece), Tomo 3, página 2167.



Respecto a los dos primeros, debe precisarse que, si bien el dictamen consolidado y la resolución correspondiente pueden ser controvertidos ante este tribunal según establece la Ley General de Partidos Políticos⁵, la Sala Superior ha dicho que, el primero tiene carácter de opinión previa con un estudio preliminar sobre las irregularidades detectadas en un procedimiento de fiscalización, por lo que sus conclusiones no son definitivas, sino de carácter propositivo.

Sin embargo, una vez aprobada la resolución respectiva, es posible impugnar ambos en virtud de que es en el dictamen consolidado en donde se encuentra la motivación en la cual se sustenta la resolución del INE, aunque las sanciones se imponen en la resolución⁶, **de ahí que, en el caso, es la resolución impugnada el objeto de la controversia que será analizada y el Consejo General, la autoridad responsable.**

TERCERA. Requisitos de procedencia. Este Juicio de la Ciudadanía reúne los requisitos para estudiar la controversia, establecidos en los artículos 7, 8, 9.1 y 13.1-b), 79 y 80 de la Ley de Medios.

a) Forma. La parte actora presentó su demanda por escrito ante esta Sala Regional, en ella hizo constar su nombre y firma autógrafa, identificó los actos impugnados, expuso los hechos, agravios y ofreció pruebas.

⁵ Artículo 82 párrafo 1.

⁶ Ver sentencia del recurso SUP-RAP-157/2019 en donde señala que el dictamen consolidado es el que contiene la motivación de la resolución, pues en ese caso el partido actor había reclamado una versión previa del dictamen, en consecuencia, la Sala Superior explicó por qué ese dictamen no le generaba perjuicio y que las cifras finales venían en el dictamen consolidado final, el cual contenía la motivación de las sanciones.

b) Oportunidad. La demanda es oportuna, toda vez que la parte actora señala que tuvo conocimiento de los acuerdos impugnados el día en que presentó la demanda -esto es el 9 (nueve) de septiembre-, sin que la autoridad responsable haya hecho alguna manifestación al respecto ni enviado alguna constancia de notificación de los actos impugnados, por lo que se cumple con el requisito de oportunidad.

c) Legitimación e interés jurídico. Se cumplen los requisitos, ya que quien presenta el medio de impugnación es una persona ciudadana que comparece por su propio derecho y en su carácter de entonces candidato al cargo por el cual contendió, a fin de controvertir el Acuerdo 1501 que determinó que rebasó el tope de gastos de campaña, lo que estima vulnera sus derechos político-electorales.

d) Definitividad. Este requisito está satisfecho, pues la norma electoral no prevé algún recurso o medio de impugnación que deba ser agotado antes de acudir a esta instancia para controvertir el Acuerdo 1501.

CUARTA. Estudio de fondo

De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte actora aduce los siguientes agravios.

Violación al debido proceso, garantía de audiencia y defensa adecuada

El promovente señala que, durante el procedimiento de fiscalización ordenado por esta Sala Regional, la autoridad responsable violentó su derecho humano al debido proceso y garantía de audiencia al obstaculizar su posibilidad para hacer

valer una adecuada defensa debido a 3 (tres) conductas atribuibles al INE y la UTF a partir de 3 (tres) temas:

a. Ilegalidad de la notificación del oficio de garantía de audiencia. Toda vez que la notificación a través del SIF no le permitió conocer de manera fidedigna si la información proporcionada es de carácter definitivo.

En ese sentido señala que recibió 3 (tres) correos electrónicos, uno el 24 (veinticuatro) de agosto -por el que se le informaba que había recibido una notificación electrónica en el SIF y al cual no pudo acceder-, el segundo el 25 (veinticinco) de agosto -mediante el cual se informaba de la notificación en el SIF y se le adjuntaron el acuse de recepción, la cédula de notificación y constancia de envío-, y el tercero de 26 (veintiséis) de agosto -por el que en alcance al anterior, se precisaba la liga donde podía descargar la información sobre la garantía de audiencia-.

Así, refiere que la responsable pretendió hacer efectiva su garantía de audiencia a través de una vía en la cual no contaba con los medios necesarios para su acceso, cuestión que a su parecer es trascendente porque en la resolución emitida por esta Sala Regional se le concedieron 72 (setenta y dos) horas para que presentara la respuesta a las observaciones de la información con la que se acreditó el rebase en el tope de gastos de campaña, plazo que comenzó a computarse a partir del 24 (veinticuatro) de agosto.

b. Insuficiencia de los medios de convicción proporcionados
Considera que la información que acreditó el rebase en el tope de gastos de campaña que le fue proporcionada no tenía un contenido claro, expreso, integral y suficiente que le permitiera

hacer valer su derecho de defensa pues no le hizo llegar la información contable que reportó MORENA -partido que lo postuló- ya que en la información proporcionada el 26 (veintiséis) de agosto se incluyeron anexos descriptivos de gastos proporcionados en los que se encontraba información genérica aportada por MORENA, pero no se incluía la documentación respaldo con la que se pretende atribuir diversos gastos a su candidatura.

En ese sentido señala que la autoridad fiscalizadora atribuye que del 4 (cuatro) de mayo al 2 (dos) de junio erogó diversos gastos que desconoció en la contestación al oficio de garantía de audiencia.

c. Falta de medios de convicción en tiempo necesario para formular una adecuada defensa

Señala que no contó con el plazo de 72 (setenta y dos) horas ordenado por la Sala Regional para formular las observaciones que estimara pertinentes puesto que el 24 (veinticuatro) de agosto se le notificó por el SIF y hasta el siguiente 26 (veintiséis) se le proporcionó la documentación contable, por lo que únicamente contó con 24 (veinticuatro) horas para contestar.

Exclusión probatoria como efecto de violaciones a derechos humanos

En este apartado sostiene que los elementos de convicción por medio de los cuales la autoridad fiscalizadora consideró acreditado el rebase en el tope de gastos de campaña deben ser excluidos al ser ilegales pues fueron valorados por la responsable a pesar de que fueron incorporados mediante transgresiones a sus derechos humanos al debido proceso, garantía de audiencia y defensa adecuada debido a que fue

MORENA quien reportó que había rebasado el tope de gastos de campaña y la documentación contable no la conoció, además de que es ajena a los gastos reales de su campaña.

En tal sentido señala que las pruebas valoradas por la responsable por virtud de las cuales se acreditó el rebase en el tope de gastos de campaña no cumplen el parámetro de legalidad probatoria. Refiere que el INE desconoce la naturaleza del conflicto pues no conoce los gastos con los que se le dio vista los cuales fueron ejercidos y reportados por MORENA.

Metodología

En este caso se señalan cuestiones, procesales, y de fondo ya que la parte actora, además de exponer su inconformidad con el Acuerdo 1501, cuestiona vicios en la notificación con la que se garantizó su derecho de audiencia pues, desde su perspectiva, con ello se vulneró el debido proceso en su perjuicio.

En esas circunstancias se atenderán en primer lugar las cuestiones procesales, pues plantea la existencia de transgresiones, violaciones o vulneraciones relacionadas a la ausencia de presupuestos procesales cometidos durante la sustanciación del procedimiento o proceso, con infracción a las normas que regulan la actuación de los sujetos integrantes de la relación jurídico-procesal.

Posteriormente, se atenderán los agravios en que pretende impugnar el material probatorio que llevó al Consejo General a emitir los acuerdos impugnados, sin que ello genere afectación alguna, al tenor de lo establecido en la jurisprudencia 4/2000 de

rubro **AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN**⁷.

Consideraciones de la Sala Regional

Violación al debido proceso, garantía de audiencia y defensa adecuada. En primer término debe señalarse que como se precisó en los antecedentes, el acuerdo deriva de lo ordenado por esta Sala Regional en la sentencia del juicio **SCM-JDC-1791/2021**, en que se vinculó al Consejo General que concediera a la parte actora la garantía de audiencia respecto de las observaciones que la UTF hizo a MORENA respecto de la campaña de la Candidatura, que de conformidad con lo analizado por la autoridad, había derivado en la determinación de que había rebasado el tope de gastos de campaña; esto, para que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran.

Al resultar fundados los agravios analizados, revocó parcialmente la resolución **INE/CG1378/2021** para que el INE, por conducto de los órganos facultados para ello, repusieran el procedimiento y otorgara la garantía de audiencia a la parte actora para que realizara las manifestaciones que estimara conforme a derecho.

Una vez realizado lo anterior, el INE debería emitir una nueva resolución en el entendido de que no podía impactar de mayor manera a la parte actora, que la resolución impugnada que acudió a impugnar en aquel momento y fue revisada en el referido juicio.

Ahora bien, mediante escrito presentado el 28 (veintiocho) de agosto, la parte actora promovió “incidente de cumplimiento de

⁷ Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001 (dos mil uno), páginas 5 y 6.



sentencia”, a partir de lo siguiente:

1. Consideró que existía una incertidumbre en la notificación que el INE le había hecho, ya que recibió información a partir de varias vías, lo que no le permitió conocer de manera fidedigna si dicha información era definitiva y estaba en el SIF.
2. No sabía cuál era la notificación a partir de la cual comenzó a computarse el plazo de las 72 (setenta y dos) horas.
3. Desconocía la información que se había subido al SIF.
4. En caso de ser definitiva la información, la consideraba insuficiente para ejercer una adecuada defensa.

Además, expresó que, con relación a la serie de gastos que la autoridad fiscalizadora le atribuía durante el periodo de campañas electorales que abarcó del 4 (cuatro) de mayo al 2 (dos) de junio, los negaba como propios y desconoció su origen.

Al sustanciar y resolver el citado incidente, esta Sala Regional determinó lo siguiente⁸:

“ ...

TERCERO. Análisis de la materia incidental

*En principio, se debe precisar que la materia de un incidente, por el cual se manifieste alguna circunstancia relacionada con el incumplimiento o la inejecución de la sentencia, **está delimitado por los parámetros ordenados en la resolución**, cuyo indebido cumplimiento se puede traducir en la insatisfacción del derecho reconocido o declarado en la sentencia.*

Lo anterior tiene fundamento, en la finalidad de la función jurisdiccional de hacer efectivo el cumplimiento de las determinaciones asumidas, de manera que solo será exigible el cumplimiento de aquello que se dispuso en la ejecutoria, con el objeto de materializar lo determinado por esta autoridad judicial y así lograr un cumplimiento eficaz en apego a lo que fue resuelto.

Ahora bien, para mayor claridad, enseguida se transcriben las partes considerativas de la sentencia de esta Sala Regional cuyo cumplimiento se cuestiona, a saber:

[...] el oficio de errores y omisiones por el cual la Unidad Técnica requirió a la coalición para que realizara las aclaraciones y rectificaciones pertinentes y, asimismo,

⁸ Con el voto concurrente de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

presentara la documentación comprobatoria y contable que se le requirió por esa autoridad, solo se notificó a dicho partido político por conducto de la persona responsable de sus finanzas, sin que al efecto haya constancia en el expediente de que el mismo se haya hecho también del conocimiento de la parte actora.

[...] asiste razón a la parte actora, pues en efecto, como lo afirma en su demanda, no fue notificada de las comunicaciones que la UTF tuvo con la coalición, dado que los oficios de errores y omisiones tan solo se hicieron del conocimiento a éste [...]

[...] con independencia de si a la postre dicho instituto político notificó o no a la parte actora el contenido de dichos oficios de errores y omisiones, lo cierto es que la UTF tenía invariablemente y, de manera extraordinaria, la obligación de notificárselos personalmente [...]

[...] la Unidad Técnica debió notificarle personalmente la determinación sobre las irregularidades detectadas en el oficio de errores y omisiones respectivo, y las cuales sustentaron su rebase de topes de gastos de campaña [...]

[...] el INE no advirtió que las faltas podrían afectar eventualmente a la persona candidata, lo que hacía necesario que fuera informada de las presuntas irregularidades para estar en aptitud de desarrollar su derecho de defensa [...]

[...] la omisión de notificación del mencionado oficio, en este caso tan solo tendrá como efecto la reposición del procedimiento a efecto de brindarle a la parte actora el derecho a presentar las aclaraciones y rectificaciones que estime pertinentes [...]

Lo anterior para que la persona candidata conozca las observaciones que la UTF hizo al Partido respecto de su campaña -incluyendo de ser el caso el prorrateo de los gastos genéricos-, de conformidad con lo analizado por la autoridad, derivó en la determinación de que había rebasado el tope de gastos de campaña y realice las manifestaciones que a su derecho convengan.

[...]

* Lo subrayado es propio de esta resolución incidental

En el caso, el objeto de este incidente de incumplimiento de sentencia se ciñe a verificar si a la parte promovente le fueron notificadas personalmente las irregularidades detectadas en los oficios de errores y omisiones a través de los que la autoridad responsable determinó el rebase de topes de gastos de campaña.

Lo anterior debía ser hecho dentro de las veinticuatro horas siguientes de que le fuera notificada la sentencia dictada en este juicio, a fin de que pudiera contar con un plazo de setenta y dos horas para presentar respuesta a esas observaciones y, en su



caso, la información o documentación que estimare pertinente para efecto de subsanar dichas irregularidades.

Así, de conformidad con la sentencia que resolvió este Juicio de la Ciudadanía, **en la cual sustancialmente esta Sala Regional determinó que la UTF había omitido notificar personalmente a quien fuera parte actora -hoy incidentista- el contenido de los oficios de errores y omisiones que hizo del conocimiento de los partidos políticos integrantes de la coalición que la postularon como candidata.**

Para tal efecto, el análisis que se realizará en esta resolución incidental partirá de tres perspectivas fundamentales, que son:

- a. Plazo para realizar la notificación;
- b. Mecanismo empleado para realizar la notificación;
- c. Contenido de la notificación.

A continuación, se expondrá cada uno de los rubros antes citados de conformidad con las constancias que integran el expediente.

a. Plazo para realizar la notificación

En principio se advierte que la referida sentencia se notificó por correo electrónico a la UTF el diecinueve de agosto, por lo cual el plazo de veinticuatro horas que se le concedió para hacer del conocimiento a la parte incidentista dichas irregularidades **feneció el veinte de agosto**⁹.

Ahora bien, a pesar de la concreción de la orden dada en la sentencia, del informe rendido por la titular de la UTF se desprende que hasta el **veinticuatro de agosto** publicó en el módulo de notificaciones electrónicas del SIF el oficio **INE/UTF/DA/40041/2021**, el cual dirigió a la parte incidentista a fin de hacer de su conocimiento los supuestos egresos relacionados con el rebase de tope de gastos de su campaña.

Asimismo, dicha funcionaria electoral manifestó que “para coadyuvar” con la parte incidentista “ya que reportó que no tenía acceso al referido sistema”, el **veintiséis de agosto** le envió mediante correo electrónico un vínculo en el cual podían consultarse los documentos y las evidencias que se hicieron de su conocimiento a través del módulo de notificaciones electrónicas del SIF.

En ese contexto, destacan por parte de la UTF **dos actuaciones** hechas para acatar lo ordenado en la sentencia cuyo cumplimiento se cuestiona, esto es, para dar vista a la parte promovente con las observaciones de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de gastos de campaña que podían implicar para esta un rebase en el tope de gastos de campaña, a saber:

Una primera notificación mediante el SIF	Una segunda notificación mediante correo electrónico
---	---

⁹ Lo anterior de conformidad con lo previsto en el apartado decimooctavo del Acuerdo General de la Sala Superior número 1/2018, de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, por el que se acuerda el procedimiento para la notificación por correo electrónico aprobado por el acuerdo general número 3/2010, para transitar al uso de las notificaciones electrónicas, conforme al cual “las notificaciones electrónicas surtirán efectos a partir de que se tenga la constancia de envío y acuse de recibo que genere automáticamente el sistema de notificaciones del Tribunal”.

veinticuatro de agosto	veintiséis de agosto
------------------------	----------------------

Así, en principio, asiste razón a la parte incidentista **por lo que respecta al plazo concedido a la UTF**, porque la UTF no realizó la notificación que en la sentencia se ordenó realizar dentro del plazo de veinticuatro horas concedido, ya que el mismo feneció el veinte de agosto y, tal como se advierte de las constancias del expediente, dicha autoridad efectuó la notificación por dos vías diferentes: mediante el módulo de notificaciones electrónicas del SIF el veinticuatro de agosto y por correo electrónico el veintiséis siguiente.

Al respecto, esa autoridad fiscalizadora no mencionó justificación alguna que le haya impedido u obstaculizado cumplir en el plazo concedido.

En ese sentido, evidentemente la autoridad obligada al cumplimiento de la sentencia incurrió en un desacato a un mandato judicial, pues efectuó actuaciones presuntamente tendentes a cumplir con la misma después del plazo de veinticuatro horas que se le concedió para tal efecto.

No obstante, a consideración de esta Sala Regional dicha circunstancia no depara perjuicio alguno a la parte incidentista, puesto que lo relevante es que la notificación finalmente se haya entendido con esta última y que se le permitiera presentar las aclaraciones y rectificaciones que a sus intereses convinieran en el plazo de setenta y dos horas que la sentencia fijó para tal efecto, debido a que en esta última se dispuso que –una vez efectuado el anterior– el Consejo General del INE tendría como fecha límite para emitir un nuevo dictamen consolidado y resolución el ocho de septiembre.

De ahí que con independencia de que la notificación no se realizó dentro de las veinticuatro horas concedidas para tal efecto, lo importante es que la misma se haya entendido de manera eficaz con la parte incidentista y que se haya permitido esta presentar las aclaraciones y rectificaciones que a sus intereses convinieran dentro del plazo antes mencionado, lo cual será objeto de análisis en el siguiente apartado.

b. Mecanismo empleado para realizar la notificación

Como parte de la controversia incidental planteada en el presente caso, se encuentra la disyuntiva que expone la parte promovente al sostener que no pudo saber cuál de los dos mecanismos que la UTF empleó como formas de notificación era al que debía atender.

Por un lado, la parte incidentista señala que el veinticuatro de agosto la UTF pretendió hacer de su conocimiento en el módulo de notificaciones electrónicas del SIF las supuestas observaciones de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de su campaña y, por otro lado, que posteriormente el veintiséis de agosto la misma autoridad fiscalizadora envió a su correo electrónico un vínculo a través del cual presuntamente podía consultar dichas observaciones.

La parte incidentista manifiesta que no le fue posible ingresar al módulo de notificaciones electrónicas del SIF, dado que –como lo sostuvo desde un inicio– no tiene una cuenta ni contraseña en dicho sistema, por lo que desconoce cuál fue la información y/o documentación que, a través del mismo, supuestamente le fue



notificada por la UTF.

Al efecto, la parte incidentista dice que si bien a través del vínculo digital que le fue brindado por correo electrónico pudo consultar información aparentemente relacionada con gastos que se atribuyeron a la campaña de su candidatura, afirma, no tenía certeza de que esa información –en realidad– sea la que la UTF pretendió hacer de su conocimiento mediante el módulo de notificaciones electrónicas del SIF, pues no pudo acceder a este último.

*En concepto de esta Sala Regional, la notificación hecha por la UTF que en el caso cumplió con la finalidad de los efectos de la sentencia dictada en el presente juicio, **es la realizada el veintiséis de agosto mediante correo electrónico al que se adjuntó el vínculo digital al cual la parte incidentista reconoce que sí pudo acceder.***

Ello es así, porque en la sentencia cuyo cumplimiento se cuestiona, esta Sala Regional no estableció un mecanismo en particular a través del cual la autoridad fiscalizadora efectuara la notificación ordenada, sino que tan solo se determinó que ello debía realizarlo de manera personal a quien fuera parte actora para que pudiera estar en aptitud de presentar las aclaraciones y rectificaciones correspondientes.

Lo anterior así lo determinó esta autoridad judicial a fin de salvaguardar los derechos de audiencia y debido proceso de la parte incidentista.

*Si bien la parte promovente al haber sido postulada por la coalición como candidata es responsable solidaria con los partidos que la integran dentro del proceso de fiscalización, no menos cierto es que la propia UTF en el informe que presentó ante esta Sala Regional admitió que pese a que el veinticuatro de agosto en principio realizó la notificación a través del SIF, **decidió hacerlo también a través de correo electrónico el veintiséis de agosto como una forma de «coadyuvar» con la parte incidentista “ya que [esta última] reportó que no tenía acceso al referido sistema”.***

Esto es, ante la imposibilidad manifiesta que externó quien fuera parte actora para acceder al módulo de notificaciones electrónicas del SIF, es que la UTF optó por llevar a cabo de nueva cuenta la notificación mediante el correo electrónico mencionado, cuyo vínculo digital sí pudo ser consultado por aquella tal como lo reconoce en su escrito incidental.

Ello, pues incluso, la propia UTF manifestó en su referido informe que la obtención de las claves de usuario y contraseña por la parte promovente estaba supeditada a que le fueran brindadas por la persona responsable de finanzas de los partidos políticos integrantes de la coalición.

En ese sentido, por encima de cualquier formalismo procesal, en el caso debe privilegiarse el método empleado por la UTF que permitió a la parte incidentista tener un completo conocimiento de las observaciones que se le notificaron a través de correo electrónico para estar en aptitud de ejercer una adecuada defensa, al reconocer esta última que a través de dicha comunicación sí pudo consultar la información de los ingresos y egresos de su candidatura que en concepto de la autoridad fiscalizadora electoral derivaron presuntamente en el rebase de tope de gastos de su campaña.

Así, el plazo de setenta y dos horas que tenía la parte incidentista para presentar las aclaraciones y rectificaciones, transcurrió del veintisiete al veintinueve de agosto, motivo por el cual, al haber presentado su escrito respectivo dentro de dicho plazo, es que se considera que pudo realizar las manifestaciones que a sus intereses convinieron.

c. Contenido de la notificación

Para el análisis del presente apartado, es esencial tener en cuenta que la sentencia cuyo cumplimiento se cuestiona por la parte incidentista ordenó **dar vista a esta última respecto de las observaciones de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de gastos de campaña que pudieron implicar para esta un rebase en el tope de gastos de campaña.**

El vínculo digital enviado por la UTF a la parte incidentista a través de correo electrónico, remite a una serie de carpetas en las cuales se ubica el oficio **INE/UTF/DA/40041/2021**, el cual es del tenor siguiente:

“En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia SCM-JDC-1791/2021, se hace de su conocimiento lo siguiente:

Rebase de tope de gastos de campaña

1. Derivado del análisis a las cifras reportadas por el partido político y derivado de los ajustes de auditoría, se determinó que la candidatura que usted representaba rebasó el tope de gastos de campaña por \$13,466.67 como se señala en el cuadro siguiente:

SUJETO OBLIGADO	PROPAGANDA UTILITARIA	OPERATIVOS DE LA CAMPAÑA	PROPAGANDA EXHIBIDA EN SALAS DE CINE	PROPAGANDA EXHIBIDA EN PÁGINAS DE INTERNET	PROPAGANDA EN DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MEDIOS IMPRESOS	PRODUCCIÓN DE MENSAJES PARARADIO Y T.V.	PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA	FINANCIEROS	DIFERENCIA DE PRORRATEO	TOTAL DE GASTOS REPORTADOS	GASTO NO REPORTADO ANEXO II-A	AJUSTES O RECLASIFICACIONES DE AUDITORIA	QUE JAS	TOTAL DE GASTOS SEGÚN AUDITORIA	TOTAL DE GASTOS	TOPE GASTOS	DIFERENCIA TOPE-GASTO
COAJHH EN PUEBLA	6,259.76	19,978.71	27,013.90	0.00	9,590.73	22.35	16.49	0.00	0.00	62,881.94	2,397.78	0.00	0.00	2,397.78	65,279.72	51,813.05	-13,466.67

Lo anterior, fue aprobado por el consejo General el día 22 de julio del 2021, mediante el dictamen número INE/CG1376/2021 y la resolución INE/CG1378/2021

Se anexa el “reporte mayor e informe de corrección” que integran los gastos reportados por los partidos políticos señalados en la columna “Total de gastos reportados” del cuadro que antecede”. (Anexo 1)

Los gastos acumulados a la candidatura por \$2,397.78 señalados en la columna “Total de gastos según auditoría” del cuadro anterior corresponden a gastos no reportados que se integran de la siguiente forma:

Número de conclusión del dictamen	Concepto	Monto	Anexo del dictamen



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación
SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO

SCM-JDC-2111/2021

12.2_C2_PB	Propaganda colocada en la Vía Pública	\$ 1,948.43	Archivo: 12.2 COA JHH.zip\12.2 COA JHH\ANEXOS_COA JHH\Anexo 1_PB 12.2 COA JHH.zip\12.2 COA JHH\ANEXOS_COA JHH\Anexo 1_BIS_PB
7_C82_FD	Monitoreo de Internet	\$ 44.44	Archivo: 12.2 COA JHH.zip\12.2 COA JHH\ANEXOS_COA JHH\Anexo 72_FD_JHH
7-C27_FD y 7_C81_FD	Monitoreo en prensa	\$ 404.91	Archivo: 12.2 COA JHH.zip\12.2 COA JHH\ANEXOS_COA JHH\Anexo 26.2_FD_JHH_Periodico Federal-Local 12.2 COA JHH.zip\12.2 COA JHH\ANEXOS_COA JHH\Anexo 26.3_FD_JHH_Periodico Federal-Local
Total		\$ 2,397.78	

Ahora bien, el monto de \$1,948.43 correspondiente a la propaganda colocada en vía pública se integra de la siguiente manera:

Nombre	Tipo de Candidatura	Entidad	Municipio	Descripción del Movimiento	Monto Calculado
PORFIRIO CASTRO MATEOS	PRESIDENTE MUNICIPAL	PUEBLA	PANTEPEC	PROPAGANDA COLOCADA EN LA VÍA PÚBLICA	\$1,948.43
Total					1,948.43

El monto de \$44.44, corresponde al prorrateo por el gasto de internet que le corresponde de acuerdo con el beneficio establecido en el Reglamento de Fiscalización.

Nombre	Tipo de Candidatura	Entidad	Municipio	Descripción del Movimiento	Monto Calculado
PORFIRIO CASTRO MATEOS	PRESIDENTE MUNICIPAL	PUEBLA	PANTEPEC	PRORRATEO POR GASTO EN INTERNET	\$44.44
Total					44.44

Por lo que corresponde al monto de \$404.91, corresponden al prorrateo de gasto en prensa que le corresponden de acuerdo al beneficio establecido en el Reglamento de Fiscalización.

Nombre	Tipo de Candidatura	Entidad	Municipio	Descripción del Movimiento	Monto Calculado
PORFIRIO CASTRO MATEOS	PRESIDENTE MUNICIPAL	PUEBLA	PANTEPEC	PRORRATEO POR GASTO EN PRENSA	\$404.91

	Total				404.91
--	-------	--	--	--	--------

Asimismo, se adjunta el Dictamen Consolidado y la Resolución respectiva en los archivos denominados: Apartado 1, 12.2 COA JHH, Punto 3.40 (Dictamen Puebla), Punto 3.40 y 3.41 Resolución Puebla firmado en Word y PDF, 044 y Voto concurrente punto 3; para mayor referencia.

Por lo anterior se le solicita presentar las aclaraciones que a su derecho convenga.”

De lo anterior, se hace evidente que, conforme a dicho oficio, de la sumatoria de los conceptos podía obtenerse el total de gastos de campaña de la candidatura, el cual una vez contrastado con el monto autorizado como tope de gastos, permitía saber la cantidad exacta que, a juicio de la UTF, fue rebasada.

De ahí que para esta autoridad judicial se considere que la parte incidentista tuvo pleno conocimiento al respecto para poder presentar las aclaraciones o rectificaciones que a sus intereses convinieran¹⁰.

Lo anterior implica que la parte incidentista pudo conocer el soporte documental de los gastos no reportados consistentes en propaganda en vía pública, monitoreo en internet y monitoreo en prensa.

...”

Ahora bien, de la lectura integral de la resolución incidental y de la demanda que dio origen a este medio de impugnación, se advierte que las cuestiones procesales señaladas en el incidente son hechas valer en esta instancia.

En consecuencia, esta Sala Regional advierte que respecto a los actos llevados a cabo por el INE para otorgar la garantía de audiencia de la parte actora y la posterior emisión del Acuerdo ya existe un pronunciamiento, por lo que no sería jurídicamente viable repetir el análisis de dichos actos.

Al respecto se señala que la cosa juzgada es una institución que dota a las partes de seguridad y certeza jurídica, en la medida

¹⁰ Lo anterior en el entendido de que en las propias carpetas que le fueron notificadas a la parte incidentista consta el archivo “Anexo R1_PB_JHH.pdf”, consistente en el escrito de contestación al oficio INE/UTF/DA/28161/2021 derivado de los informes de campaña del proceso electoral local 2020-2021 en Puebla que presentó el representante de finanzas de la coalición.



que lo resuelto constituye una verdad jurídica, que -de modo ordinario- adquiere la característica de inmutabilidad.

Su finalidad es otorgar certeza a través de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada para impedir que se prolonguen las controversias si se mantienen abiertas las posibilidades de impugnar de forma indefinida las resoluciones emitidas por la autoridad jurisdiccional¹¹.

En consecuencia, esta Sala Regional considera que las alegaciones señaladas son **inatendibles** pues ya se emitió pronunciamiento respecto de la legalidad de los actos materia de la controversia, motivo por el cual no es viable que la parte actora pretenda una nueva revisión en este juicio de actos ya fueron materia de examen por parte de este mismo órgano colegiado.

Valoración probatoria. Ahora bien, en relación con la indebida valoración probatoria que alega la parte actora, debe precisarse que, también alegó cuestiones relacionadas en el incidente; sin embargo, es factible el pronunciamiento de esta Sala Regional al respecto, pues la ilegalidad del material probatorio la realiza a partir del conocimiento del Acuerdo 1501 como acto definitivo.

El agravio es **inoperante** pues la parte actora sostiene que los elementos de convicción fueron valorados por la responsable a pesar de que fueron incorporados mediante vulneraciones a sus derechos humanos al debido proceso, garantía de audiencia y defensa adecuada, pues MORENA -partido que lo postuló a la Candidatura- fue quien reportó que había rebasado el tope de gastos de campaña y no conoció la documentación contable.

¹¹ Ver la jurisprudencia **12/2003**, consultable en las páginas 9 a 11 de la revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral, suplemento 7, año 2004 (dos mil cuatro), de rubro **COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA.**

Los agravios son inoperantes pues como se ha señalado en los párrafos precedentes, la parte actora contó con elementos proporcionados a partir del cumplimiento de la sentencia emitida en el expediente SCM-JDC-1791/2021, por lo que contrario a lo señalado en el presente juicio, desde el momento en que se garantizó su derecho de audiencia pudo realizar las manifestaciones que estimó pertinentes a su causa a partir del conocimiento de la documentación que se le hizo llegar y a la que tenía acceso en el SIF.

Aunado a lo anterior, esta Sala Regional advierte que las manifestaciones relacionadas con este agravio son una reiteración de lo señalado en el escrito de 27 (veintisiete) de agosto mediante el cual respondió la garantía de audiencia que le fue concedida y en el escrito de incidente presentado el 28 (veintiocho) de agosto.

En efecto, al igual que en la demanda que originó este juicio, en ambos escritos realiza manifestaciones en términos similares, sin aportar medios o elementos de prueba que permitan a esta Sala Regional realizar un estudio de la ilegalidad que aduce respecto de las pruebas consideradas por la autoridad responsable para concluir que rebasó el tope de gastos de campaña.

Además, la parte actora pudo realizar las manifestaciones que al efecto considerara pertinentes, respecto de la documentación hecha de su conocimiento, no obstante, se limitó a señalar que negaba categóricamente que hubiera rebasado el tope de gastos de campaña fijado por la autoridad administrativa, misma circunstancia referida en el escrito incidental.



En ese contexto, la inoperancia de los agravios radica también en el hecho de que la parte actora se abstiene de controvertir las consideraciones de la autoridad responsable relacionadas con el rebase en el tope de gastos de campaña y basa su alegación en el supuesto desconocimiento de la documentación que, como se ha señalado, le fue notificada.

Lo anterior, con apoyo en la razón esencial de la tesis I.5o.A.10 A de rubro: **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. CUÁLES TIENEN ESA CALIDAD, POR NO CONTENER ARGUMENTOS TENDENTES A IMPUGNAR LAS CONSIDERACIONES QUE DIERON SUSTENTO A LA SENTENCIA DE NULIDAD CONTROVERTIDA**¹², la cual es orientadora para esta Sala Regional y en la que se sostiene que tienen ese calificativo los argumentos que dejan de exponer la razón de la afectación de derechos de manera cierta y evidente.

Así, al resultar **inatendibles e inoperantes** los agravios de la parte actora, lo procedente es confirmar el Acuerdo 1501 impugnado, en lo que fue materia de controversia.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Sala Regional

RESUELVE

ÚNICO. Confirmar -en lo que fue materia de impugnación- el Acuerdo 1501.

Notificar por correo electrónico a la parte actora y al Consejo General -con copia certificada de la presente sentencia-, a la

¹² Consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018 (dos mil dieciocho), Tomo IV, página 2960.

Comisión de Fiscalización, así como la UTF;¹³ y, por **estrados** a las demás personas interesadas. Asimismo, infórmese vía **correo electrónico** a la Sala Superior, en atención al Acuerdo General **1/2017**.

De ser el caso, devolver la documentación que corresponda y, en su oportunidad, archivar el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por **unanimidad** de votos, la magistrada y los magistrados, ante la secretaria general de acuerdos, quien autoriza y da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firma electrónica certificada, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con el Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se emitan con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

¹³ Al haberlo solicitado en su escrito de demanda e informe circunstanciado, respectivamente, además, de ser acorde al espíritu del punto QUINTO del acuerdo emitido por el Pleno de la Sala Regional el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el cual se determinó privilegiar "... LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y POR ESTRADOS, SOBRE LAS PERSONALES", con la atenta recomendación de **observar en todo momento y de manera puntual** los lineamientos y directrices que han sido trazados tanto por el Gobierno Federal como por el de la Ciudad de México en el contexto de la pandemia provocada por el virus denominado "CORONAVIRUS COVID-19", salvaguardando la integridad de las personas.